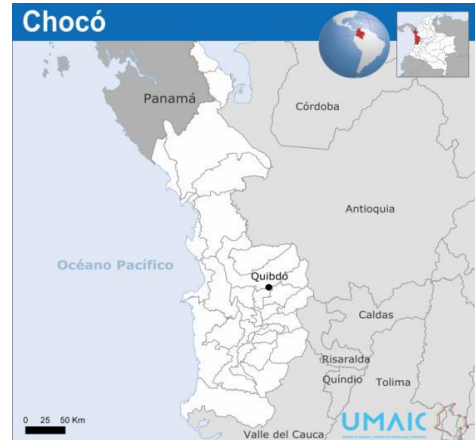


CHOCÓ | Abril 2017

DATOS DEPARTAMENTALES

Gobernador		Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera
Datos Demográfico ^{§1}	Población	Total población 510.047 I 49.17% Cabecera; 50.83% Rural II 50.12% Hombres; 49.88% Mujeres III 73.61% Negro, Afrocolombiano; 11.36% Indígena; 4.67% sin pertenencia étnica (2005) IV
	Población desplazada	PDI individuales: 5.314 (2008-2017); 656 (2015); 2.640 (2016) i PDI masivos: 38.804 (2009-2017) ii: 51.36% mujeres, 47.99% hombres, 0.62% sin información, 0.03% LGTBI iii; 7.137 (2016); 3.876 (2017) iv
Datos humanitarios y de desarrollo y paz ²	Víctimas de Minas	Civil: 75 (1990-2017); 3 (2016) v; 1 (2017) vi Fuerza Pública: 69 (1990-2017); 9 (2016); 0 (2017) 11.89% mujeres, 88,11% (1990-2017) vii
	Acceso y Confinamiento	124 eventos (2013-2017); 42 (2016); 10 (2017) 75.727 afectados* (2013-2017); 17.158 (2016); 5.884 (2017) viii
	Desastres Naturales	769.351 (2011-2017); 165.047 (2016); 1.245 (2017) ix
	Homicidios	133 (2015) 173 (2016): 90.2% hombres, 9.8% mujeres x
	Amenazas	129 eventos (2008-2017); 23 (2016); 13 (2017) xi
	Ataques contra la población civil	349 eventos (2008-2016); 54 (2016); 22 (2017) xii
	Acciones Bélicas	333 eventos (2008-2016); 40 (2016); 15 (2017) xiii
	Incidencia de la pobreza por ingresos	62.8% (2015); 59.8% (2016) xiv
	Cobertura bruta en educación media	56.2% (2013); 64.9% (2014) xv
	Mortalidad Infantil Ajustada	42.8 (2013), 43.3 (2014) por cada 1.000 nacidos vivos xvi
	Desempleo	15.1%: 10.7% hombres, 20.3% mujeres (2015); 17.5% (2016) xvii



El Departamento de Chocó se encuentra ubicado en la esquina noroccidental de Colombia, bañado por los océanos Atlántico y Pacífico. Limita al norte con la República de Panamá y el mar Caribe; por el este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca; por el sur con Valle de Cauca; y por el oeste con el océano Pacífico. Tiene una extensión de 46.530 km², distribuidos en 30 municipios.

MENSAJES CLAVES

- La crisis humanitaria, económica y social que se agudiza en Chocó implica un importante reto de coordinación entre instituciones gubernamentales, Organizaciones Étnico Territoriales (OET) y de cooperación, con el fin de redoblar esfuerzos y complementar las acciones que permitan superar las afectaciones a las comunidades, los territorios y el medio ambiente. (Ver Contexto Humanitario y Retos, pg. 6).
- Los conflictos en el territorio sumados a las persistentes acciones bélicas y ataques contra la población civil en zonas rurales y, cada vez más, en urbanas, están profundizando una crisis humanitaria que se suponía sería superada en buena parte con la firma del acuerdo de paz con las FARC. Es necesario reforzar la presencia del Estado y fortalecer la capacidad de acción de las OET y las comunidades mismas. (Ver Contexto en Construcción de Paz y Retos, pg. 2).
- La brecha entre el progreso promedio del país y el del Chocó es amplia. El departamento encabeza todos los indicadores que resaltan su estancamiento en desarrollo: pobreza, desnutrición, mortalidad infantil, mortalidad materna, violencia sexual y basada en género, desempleo, carencia de servicios públicos, inasistencia y deserción en educación, déficits de vivienda, precariedad del derecho a la salud, entre otros. Buscar la activación de la economía departamental, lejos de una base de economías extractivas, es perentorio para sanar esa brecha y alcanzar indicadores acordes con los ODS. (Ver Contexto de Desarrollo Sostenible, pg. 4).

¹ Datos demográficos: I y II) DANE, Proyecciones de población por área 2017; III) DANE, Proyecciones de población por sexo 2017; IV) DANE, Censo 2005.

² Datos humanitarios y de desarrollo y paz: i) SIDI con base en UARIV (corte a 01/02/2017); ii) Matriz de desplazamientos OCHA (corte a 31/03/2017); iii) UARIV, Registro Único de Víctimas (RUV) - Desplazamiento – Enfoque diferencial (corte a 01/02/17); iv y vi) SIDI – UMAIC (corte a 15/05/2017); v y vii) DAICMA Víctimas por MAP-MUSE (corte a 28/02/2017); viii) UMAIC, SIDI Eventos de restricción al acceso humanitario. *Importante aclarar que no es posible registrar número total de víctimas en estos eventos, por lo que la cifra dada es menor a la real (corte a 31/03/2017); ix) UNGRD, RUD; x) Medicina legal – Tablero de muertes externas; xi, xiii) UMAIC, SIDI (corte a 31/03/2017); xiv) Cálculos UMAIC con base en GEIH-DANE; xv) Ministerio de Educación, Estadísticas sectoriales (2014); xvi) DANE, EEVV - Visor de TMI (2014); xvii) DANE – Empleo y desempleo.

1. CONTEXTO EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RETOS

MENSAJES CLAVE

- Los enfrentamientos por el control territorial se hacen cada vez más comunes. En las zonas rurales, las disputas por las zonas que estaban bajo el control de las FARC (hasta su desmovilización) se han dado a través de incursiones y enfrentamientos de Grupos Armados No Estatales (GANE), generando afectaciones directas sobre las comunidades. De la misma manera, en las zonas urbanas la violencia perpetrada por GANE y bandas delincuenciales por el control del territorio ha incrementado, afectando a la población civil.
- Es importante fortalecer las numerosas iniciativas de paz existentes en el departamento y los impulsos por concretar la implementación de los acuerdos en materia de derechos de las víctimas, participación y promoción de derechos de las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad como las mujeres, adolescentes y comunidades afro e indígenas.
- Continúa siendo apremiante la inversión y la gestión más eficientes de las instituciones locales y nacionales en el territorio, con el fin de mejorar las condiciones de vida y garantizar la construcción de una paz con derechos. De la misma manera, es necesario que los gobiernos nacional y departamental escuchen las crecientes movilizaciones sociales y den respuesta a las exigencias que, en su totalidad, se enfocan en la conquista de derechos.

CONTEXTO CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RETOS

1. **Conflictos en el territorio.** Los conflictos del territorio chocoano tienen raíz en el aprovechamiento ilícito de su riqueza natural y su posición geo estratégica. El departamento se constituye como un corredor para el tráfico de estupefacientes y personas, desde el sur de la Región Pacífico hacia el norte, en su salida al Océano Atlántico. Las principales fuentes económicas son actividades extractivas ilegales: minerales (principalmente oro) y madera. Estas actividades han generado deforestación, contaminación de fuentes hídricas y de alimentación, así como un arraigo de diversos grupos armados ilegales: guerrillas, grupos paramilitares y bandas delincuenciales. Desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, las disputas por los territorios dejados por esta guerrilla han ocasionado fuertes impactos violentos sobre las poblaciones en todo el departamento. Recientemente, ha incrementado el control de las zonas urbanas por parte de actores armados y criminales. La presencia estatal en el territorio es precaria, no hay reconocimiento de la institucionalidad nacional, departamental y municipal en las comunidades, y hay un fuerte cuestionamiento hacia su gestión administrativa. La falta de políticas públicas sólidas y compenetradas con la realidad del departamento dificulta la producción económica y de empleo, la atención y prevención de frecuentes desastres naturales, y el cumplimiento de los estándares internacionales mínimos en materia de vivienda, alimentación, agua potable, acceso a la salud, protección y bienestar social y a educación de calidad.

2. **Derechos de las víctimas.** Las cifras sobre víctimas por el conflicto armado en el departamento del Chocó indican que, desde 1985, 449.845 personas han sido víctimas por el conflicto armado (50.9% mujeres, 48.3% hombres). El desplazamiento es el mayor hecho victimizante con 429.199 personas, seguido de la amenaza (15.055) y el homicidio (11.264). Según los datos registrados, las mujeres han sido las más afectadas por la pérdida de bienes e inmuebles, desplazamiento, tortura, delitos contra la integridad sexual y amenaza. Los hombres, en cambio, se han visto más damnificados por homicidio, desaparición forzada, secuestro, actos terroristas y minas antipersona³.

Los principales problemas que enfrentan las víctimas para acceder a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación están relacionados con la ausencia de presencia estatal, la dificultad de coordinación entre instituciones gubernamentales, los altos costos que acarrearán los procesos para éstas y las dificultades de acceso a los territorios. Las Organizaciones Étnico-Territoriales (OET) del departamento y otras organizaciones sociales, como el Comité de Víctimas, trabajan realizando incidencia con instituciones municipales, departamentales y nacionales, así como con vías de derecho y seguimiento a los procesos en busca de la garantía de dichos derechos. Cabe resaltar que en el departamento hay dos procesos emblemáticos en materia de reparación a víctimas del conflicto armado: Bojayá y el Resguardo Tahamí del Alto Andágueda. Aunque estos significan importantes avances, la labor institucional carece de perspectiva étnico-territorial y de género, no tiene en cuenta los procesos de consulta previa y manifiesta déficits de coordinación.

³ UARIV- Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Registro Único de Víctimas (RUV). Corte 01 marzo de 2017

3. Movilización social. Las protestas y movilizaciones son uno de los medios de las comunidades para lograr compromisos por parte de las entidades estatales. En el último trimestre de 2016 y lo corrido del año 2017 se destacan las movilizaciones por el control territorial de Belén de Bajirá, promovidas por el Comité Prodefensa de Belén de Bajirá y el Comité Cívico por la Dignidad y la Salvación del Chocó -realizadas en Bogotá, Quibdó y Riosucio-; los bloqueos de vías por parte de comunidades indígenas en diferentes municipios, buscando reconocimiento de sus derechos fundamentales; la unión de las madres comunitarias del Chocó al paro nacional del mes de marzo de 2017; y el nuevo paro cívico convocado por el Comité Cívico para mayo de 2017, contra los incumplimientos del Gobierno Nacional en los acuerdos del paro cívico departamental de agosto de 2016 en materia de vías, empleo, servicios públicos, salud, educación, cultura y deporte. Además, fueron importantes las movilizaciones y mítines por el cese bilateral y definitivo al fuego entre el Gobierno y las FARC a finales del 2016.

4. Capacidad institucional y social. Una característica del departamento es su composición poblacional indígena y afrodescendiente, con identidad cultural propia y formas organizativas que, a pesar de estar amparadas por leyes nacionales e instrumentos internacionales de protección, tienen poco impacto en las instituciones del Estado. Las OET (consejos comunitarios de afrodescendientes y asociaciones indígenas) tienen estructuras consolidadas a lo largo del territorio, pero no cuentan con capacidad fortalecida de ejercer control sobre las medidas que reglan las gestiones sobre éste.

En materia institucional la legitimidad, credibilidad y articulación con la sociedad son casi nulas. Según el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (ITEP) 2015-2016, Chocó es el departamento con mayor riesgo de corrupción en el país. En la capital, la situación es muestra de lo que pasa en el departamento: según los resultados de la encuesta Quibdó Cómo Vamos de febrero de 2017, el 88% de los quibdoseños cree que la ciudad “va por mal camino”; mientras sólo el 9% tiene una visión favorable del alcalde en ejercicio y el 8% del Concejo de la ciudad.

5. Seguridad ciudadana. El departamento cuenta con la Fuerza de Tarea conjunta TITAN- FTC, integrada por tropas de la Séptima División del Ejército, un componente de la Fuerza Naval del Pacífico y unidades del Comando Aéreo de Combate No.5 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC); además, hace presencia la Brigada Fluvial de Infantería de Marina No.2 y la Policía Nacional, esta última con estaciones en todos los municipios y corregimientos.

Persisten amenazas y violencia efectiva contra las comunidades en virtud del contexto político. Disputas territoriales entre las AGC y el ELN han derivado en enfrentamientos, desplazamientos, homicidios, amenazas, restricciones a la movilidad y confinamientos, manteniendo la crisis humanitaria tanto en zonas rurales como en cabeceras municipales. Los municipios más afectados han sido El Litoral del San Juan, Alto Baudó, Lloró y Riosucio. En las principales ciudades, fenómenos de delincuencia, homicidios selectivos, extorsión a comerciantes y "limpieza social" se han tomado los entornos. Según la encuesta Quibdó Cómo Vamos, sólo el 8% de los habitantes se siente seguro en la ciudad. La Iglesia Católica y Pastoral Social han encabezado la labor de promover la convivencia y la resolución pacífica de las diferencias mediante llamamientos públicos y programas en las zonas urbanas más afectadas.

6. Hechos de implementación de paz. Por resolución departamental, desde abril de 2016 está en funcionamiento la Mesa Técnica Departamental de Posconflicto y Construcción de Paz, impulsada por la Gobernación y una alianza por la paz y la reconciliación. Por su parte, la Unidad Nacional de Protección, en conjunto con la URT, la Gobernación y ministerios, viene realizando Comités de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, CERREM, para la garantía de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La UARIV, la Fiscalía General, Medicina Legal, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y ONU DDHH adelantan, junto al Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, el proceso de identificación, individualización y entrega digna de los restos mortales de quienes murieron el 2 de mayo de 2002 y los días siguientes. Así mismo se está construyendo el Plan Integral de Reparación Colectiva para Bojayá y el resguardo Tahamí del Alto Andágueda. Desde la firma de los acuerdos, la Misión de la ONU en Colombia viene trabajando en conjunto con la totalidad de la Misión de Monitoreo y Verificación (MMV) en dos Puntos Transitorios de Normalización (PTN): Florida (municipio de Riosucio), para los ex combatientes del Frente 57, y Vidrí (municipio de Vigía del Fuerte, Antioquia, que tiene entrada por el río Atrato), para los frentes Aureliano Rodríguez y 34.

2. CONTEXTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

MENSAJES CLAVE

- La ausencia de producción económica y de generación de empleo, así como falta de educación y formación de calidad, imposibilitan la mejora en las condiciones de vida y perpetúan las condiciones de pobreza. Asimismo, el abandono estatal y la corrupción influyen en que persistan las deficientes condiciones estructurales de la salud, educación y vivienda, así como la continua situación de vulneración de derechos y falta de protección.
- Es perentorio desarrollar políticas o estrategias -nacionales y locales-, claras y acordes con la realidad del departamento, que busquen avanzar en el desarrollo sostenible del departamento; así como también desarrollar y fortalecer las capacidades organizativas y de auto-gestión de las Organizaciones Étnico Territoriales (OET) y las comunidades.
- El impacto de las intervenciones estatales y organizacionales ha sido de mediano y corto alcance. Es necesario un esfuerzo mayor para superar los retos que el departamento impone en materia de desarrollo, abogando por la superación del conflicto, la construcción de infraestructura vial y el cuidado de las riquezas naturales, para fomentar el desarrollo rural e industrial y la equidad en el Chocó.

CONTEXTO DESARROLLO Y RETOS

- 1. Pobreza.** En 2016 Chocó se ubicó en el primer puesto del país en pobreza con el 59.8% de las personas bajo la Línea de Pobreza Monetaria y el 34.7% bajo de Pobreza Extrema⁴, es decir que el 94.5% de la población tuvo condiciones paupérrimas de vida. De la misma manera, Quibdó fue la ciudad capital de Colombia con la mayor pobreza monetaria (49,2%), la mayor pobreza monetaria extrema (19,5%) y la mayor desigualdad (Coeficiente de Gini 0,536)⁵. Las Necesidades Básicas Insatisfechas también son alarmantes (79%), teniendo mayor incidencia en las zonas urbanas (82%) que en las rurales (76,1%)⁶ y casi triplicando el promedio nacional (27,7%). Estos indicadores se manifiestan en la desnutrición, la mortalidad evitable de niños y adultos, la precariedad de las viviendas y el escaso acceso a servicios públicos.
- 2. Mercado Laboral.** La economía departamental se sustenta en minerales metalíferos (15.9%) y en la administración pública y defensa (15.5%). La producción agropecuaria y pesca aportan 7.7%; y la silvicultura -extracción de madera-, 7.4%. En todas las ramas de actividad trabajan hombres y mujeres en condiciones laborales precarias y con remuneraciones bajas. En extracción minera ilegal se ha comprobado la participación laboral de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). El Producto Interno Bruto (PIB) departamental está decreciendo desde 2012 y, para 2015, éste era sólo el 0.4% del PIB nacional⁷. El PIB *per cápita* es de \$5'832.564, el segundo más bajo del país⁸. La concentración económica en extracción y servicios (77.2%) y la falta de producción agrícola e industrial dificultan la creación de empleos. A esto se suma la escasa capacitación y educación de calidad. Quibdó es la segunda capital con mayor desempleo del país en el primer trimestre de 2017 (16.9%) y su tasa de desocupación se ubicó en el 49.1%⁹. El acceso al mercado laboral es más restringido para mujeres y jóvenes en el departamento, mientras la tasa de desempleo de hombres es de 6.6%, la femenina llega a 17.1% y la de jóvenes al 21.7%.
- 3. Educación.** El Informe sobre Crisis Humanitaria de la Defensoría del Pueblo (2014) señala que en Chocó el 20% de los chocoanos no cuenta con ningún nivel educativo; el 37.3% ha alcanzado el nivel de básica primaria; el 25.8%, secundaria, y solo el 7.3%, nivel superior y posgrado; también que la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años es del 20.9% y la asistencia escolar es del 58%. El reto de la deserción es bastante grande sobre todo en el nivel superior de la educación: la deserción escolar de 7.1%; mientras la de formación Técnica y Tecnológica, 34.6%; y de educación universitaria, 50.1%¹⁰. En materia de calidad, el departamento se encuentra entre los últimos tres puestos de los resultados de las pruebas Saber 2016¹¹. Algunas de las principales dificultades son la insuficiencia de inversión que se vive en todo el país; el desvío de los recursos educativos y, por ello, la falta de inversión en formación académica y pedagógica y en incentivos para docentes; la carencia de la familia en el proceso formativo de los estudiantes y la ausencia de una estrategia académica a largo plazo. Un reto importante es la conciliación de la etnoeducación, teniendo en cuenta la composición afrocolombiana e indígena de la población.

⁴ Cálculos de UMAIC con base en DANE-GEIH.

⁵ DANE – Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia. 2016. En: <https://goo.gl/6yGoqO>

⁶ DNP. Finanzas Públicas de Chocó, 2015. En: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Choc%C3%B3%2015.pdf>

⁷ El Tiempo. 2016. Las cifras que tienen indignado al Chocó. En: <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/las-cifras-que-tienen-indignado-al-choco-28264>

⁸ DANE. Empleo y desempleo. 2017. En: http://dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_bol_empleo_feb_17.pdf

⁹ DANE. Empleo y desempleo. 2017. En: http://dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_bol_empleo_feb_17.pdf

¹⁰ Ministerio de Educación. Estadísticas de deserción escolar (<https://goo.gl/y3094>) y en educación superior (<https://goo.gl/BSuQIT>)

¹¹ El Tiempo. Resultados Pruebas Saber 2016. En: <http://www.eltiempo.com/vida/educacion/resultados-pruebas-saber-11-2016-51010>

4. Salud. En el departamento el sistema de salud se encuentra altamente afectado por la corrupción: el hospital departamental de segundo nivel se encuentra intervenido por malos manejos desde el año 2007 y, en 2016, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó su liquidación. A pesar de ser el tercer sector con mayor inversión (en 2015 de 93.196 millones de pesos)¹² la situación del sistema es precaria. Las enfermedades prevenibles y curables deterioran la calidad de vida en las comunidades, los NNA son el grupo poblacional más afectado. La malnutrición, las enfermedades parasitarias del tracto digestivo y, en las comunidades cercanas a las minas, las asociadas a la exposición a cianuro y mercurio son las afectaciones más frecuentes. Según el Análisis de Situación en Salud de 2015, Chocó tenía la Tasa de Mortalidad Perinatal más alta del país (24.99); una Tasa de Mortalidad en la Niñez de 30,26, la quinta más alta del país; una Razón de Mortalidad Materna que duplicaba la nacional (116.11); y una Tasa de Mortalidad por Enfermedad Diarréica Aguda en menores de 5 años que triplicaba la del país (10.59)¹³. Según el DANE (2014), después de Amazonas, Chocó es el departamento con mayor TMI (43.3). Por otro lado, es visible la crisis de la medicina tradicional de las comunidades afro e indígenas. El desplazamiento forzado y los homicidios a sabedores (as), Jaibanás, parteras y otros poseedores de saberes relacionados con la salud han diezmando la capacidad de autocuidado comunitario y han puesto en peligro la transmisión de estos conocimientos, parte fundamental de la identidad y acervo cultural de pueblos.

5. Vivienda y servicios públicos. El déficit de vivienda refiere a necesidades insatisfechas en materia habitacional: en Chocó, el 84% de los hogares tiene déficit cualitativo o cuantitativo. En 2013 había un déficit de más de 80 mil viviendas en el departamento y de 23 mil en Quibdó¹⁴. El informe de Crisis Humanitaria en Chocó de la Defensoría del Pueblo (2014) mostró que la cobertura de acueducto es de 22.5% y la de alcantarillado de 15.9%. A pesar de la pluviosidad, el agua presenta contaminación por metales pesados, eses, jabón y descomposición de residuos sólidos. En 11 de los 30 municipios aún no existe la energía eléctrica. La cobertura de Internet es de 2.8%. Familias desplazadas que se han instalado en las cabeceras municipales, lo han hecho sin conexiones a servicios públicos y expuestas a inundaciones y enfermedades por vectores.

6. Sostenibilidad. La mayor parte del territorio chocoano hace parte del ecosistema de bosque lluvioso tropical. Alberga tres Parques Nacionales Naturales: Los Katíos, Ensenada de Utría y Tatamá. Su riqueza natural no tiene la protección suficiente: está dentro de los 5 departamentos que concentran el 61% de la deforestación nacional aportando 10.353 ha en 2014¹⁵ y una cuarta parte del PIB departamental se sustenta en economías extractivas –registradas en las cuentas–: minería, tala de árboles y saqueo de animales endémicos vendidos como exóticos. Las multinacionales Exploraciones Chocó Colombia S.A.S. y AngloGold Ashanti S.A. son quienes ostentan la mayor cantidad de títulos mineros vigentes¹⁶. La deforestación de las selvas ha mermado sustancialmente la capacidad de absorción del agua, por lo que las inundaciones se presentan cada vez con más frecuencia y fuerza en las riberas de ríos y quebradas, causando pérdidas de vidas humanas, animales, cultivos y bienes. La totalidad de víctimas de desastres son comunidades indígenas y afrocolombianas. La escasa y débil presencia de la autoridad ambiental en el departamento, la presión ejercida en los recursos naturales por los grupos ilegales y delincuenciales han provocado una degradación ecológica que debilita la riqueza natural.

7. Cultura política. La participación ciudadana se da en el marco de los consejos comunitarios afrodescendientes y las asociaciones indígenas que cubren todo el territorio, pero la falta de recursos y de reconocimiento institucional no permiten una incidencia fuerte ni un control real de la ciudadanía sobre los territorios y las decisiones. Los procesos organizativos de las mujeres son incipientes, tienen poco apoyo y la capacidad de incidencia política es menor. La abstención electoral es mayor en elecciones de orden nacional; como presidenciales (69.73%), del Congreso de la República (55.61%) y del Plebiscito sobre los Acuerdos de Paz (67.13%); que en las regionales y locales, en las cuales se ubica por debajo del promedio del país, entre el 37 y el 45%¹⁷.

8. Concentración de la tierra y su vocación. El clima tropical del Chocó le permite ser apto para la producción permanente y transitoria. Pero problemas de calificación, aislamiento por falta de vías inter-departamentales e internas, deforestación, lluvias y cambios en las actividades productivas del campo por las extractivas han sido los principales obstáculos para el desarrollo rural en el Chocó. Desde 2015 los cultivos de coca han aumentado, en 2016 se reportó la existencia de ellos en 1.803 ha, siendo los municipios más afectados Itzmina y San José del Palmar¹⁸. La Dirección Territorial de la URT adelanta cinco casos de restitución de tierras en 12 municipios¹⁹.

¹² DNP. Finanzas públicas de Chocó, 2015. En: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20publicas/Choc%C3%B3%202015.pdf>

¹³ Ministerio de Salud. ASIS, 2015. En: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-2015.pdf>

¹⁴ DNP. Desarrollo Territorial de Chocó, 2016. En: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Chococo.pdf>

¹⁵ El Espectador, 2016. En: <http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiental/aumenta-16-tasa-de-deforestacion-colombia-articulo-600483>

¹⁶ Tierra Digna, 2015. La Minería en clave de Derechos. Página 58. En: http://tierradigna.org/pdfs/LA%20MINERIA%20EN%20CHOCO_web.pdf

¹⁷ Incluye Alcaldía (37.26), Gobernación (37.98), Asamblea departamental (38.74) y JAL (44.63) – Registraduría Nacional, Resultados Históricos, 2017.

¹⁸ UNODC, Monitoreo de Territorios Afectados por los Cultivos Ilícitos, 2016. En http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/censos/OF02012016_monitoreo_territorios_afectados_cultivos_ilicitos_2016.pdf

¹⁹ (4 en comunidades negras y 1 de indígenas). Por la particularidad étnica, el 93% del total del territorio es propiedad de las comunidades; el 3%, individual; y el 4%, del Estado.

3. CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS

MENSAJES CLAVE

- La situación humanitaria del departamento no se superó con la desmovilización de las FARC-EP. Incursiones, presencia, amenazas, enfrentamientos y combates, homicidios y secuestros de Grupos Armados no Estatales (GANE) y Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD) en diversos territorios han ocasionado más desplazamientos y restricciones a la movilidad en el último semestre²⁰ que todo el año 2015. El Litoral de San Juan, Alto Baudó, Lloró y Riosucio son los municipios más afectados. Las víctimas son comunidades indígenas y afrodescendientes, siendo las mujeres, niñas y niños afectados de manera desproporcional ante estos hechos victimizantes.
- Es de resaltar la expansión y el crecimiento de GAPD hacia el norte y el sur del departamento. Sus acciones armadas por controlar el territorio y los negocios particulares o comunitarios mediante la extorsión han generado el 53.8% de los desplazamientos de los últimos 6 meses; además, han generado amenazas, secuestros, restricciones a la movilidad, reclutamiento de menores, extorsiones, homicidios y miedo y zozobra en las comunidades. Riosucio, Lloró, la cuenca del río Baudó, El Litoral de San Juan, Medio San Juan y Tadó son los municipios donde más hacen presencia.
- A pesar de que eventos de desplazamiento se dan una y otra vez en algunos municipios desde hace varios años, aún no existen medidas de prevención y respuesta sólidas y efectivas. Es un reto y una necesidad para las autoridades locales, departamentales y nacionales generar mecanismos de prevención, rutas de atención rápidas a emergencia y espacios adecuados de recepción (albergues) desde un enfoque diferencial de género y étnico.

CONTEXTO HUMANITARIO Y RETOS

1. **Desplazamiento Forzado.** En el último semestre (octubre 2016 – marzo 2017), se presentaron 16 eventos de desplazamiento masivo, dejando como víctimas a 4.873 indígenas y afrocolombianos (con una distribución cercana al 50%-50%). El número de desplazados de estos 6 meses es el 156% de todos las víctimas de 2015. Sólo en el 44 % de los eventos se dispuso de albergues para las familias desplazadas. Los municipios más afectados fueron El Litoral de San Juan (1.826 víctimas), Riosucio (960) y Alto Baudó (602). Aunque no hay información desagregada para todos los eventos, se sabe que al menos 784 NNA se desplazaron. El 50% de los eventos se dio por combates o enfrentamientos en las comunidades²¹, el 35.7% por homicidios selectivos y amenazas generales y los restantes (14.3%) por amenazas a líderes. Los Grupos Armados Post-desmovilización (GAPD) participaron en el 53.8% de los eventos, seguidos del ELN (46.1%) y las Fuerzas Militares (23.1%) en combates con otros actores armados²². Se identifican capacidades limitadas de los entes responsables de responder a las emergencias y falta de medidas preventivas sólidas que eviten las desgracias recurrentes. Los retornos se dan, en diversas ocasiones, de manera espontánea, sin acompañamiento institucional integral y sin asegurar los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.
2. **Minas Antipersonal (MAP) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG).** Entre 2016 y el primer trimestre de 2017, hubo tres incidentes de MAP en los municipios de Nuquí, Bajo Baudó y Riosucio. En ellos, cinco civiles resultaron afectados, el 100% de ellos indígenas Emberá y el 80% menores de edad. Sólo uno de ellos falleció: una niña de 6 años. Además de esto, en este período se presentaron combatientes afectados: 4 de las AGC²³ y 9 de la Fuerza Pública²⁴. Otras comunidades de la cuenca del río Baudó y los municipios de Bojayá y Medio Atrato han reportado contaminación con minas y otros artefactos explosivos como estrategia de combate entre los grupos armados no estatales en sus territorios.
3. **Niños, Niñas, Adolescentes (NNA) en conflicto armado.** Los municipios El Litoral del San Juan; Bajo, Medio y Alto Baudó; Istmina; Quibdó; Lloró y Riosucio son los casos más críticos frente a uso y reclutamiento forzado de NNA. Las Organizaciones Étnico Territoriales (OET) e instituciones educativas temen activar las rutas y denunciar las situaciones a las que NNA están expuestos. Aunque no hay cifras exactas sobre reclutamiento por parte de grupos armados, hasta diciembre de 2015, al menos 178 NNA habían ingresado a programas de protección del gobierno; y en 2016 se reportaron 12 casos de vinculación²⁵. Preocupa la presencia que GAPD y FPPP dentro de los establecimientos educativos y la ubicación de infraestructura militar en los alrededores. El ELC ha realizado incidencia con las autoridades locales, sus miembros implementan programas de atención en educación en emergencias, WASH, apoyo psicosocial y protección en grupo etario.

²⁰ Último trimestre de 2016 y primer trimestre de 2017 (octubre 2016-marzo 2017)

²¹ Enfrentamiento refiere a una confrontación armada entre grupos al margen de la ley. Combate, por su parte, a confrontación armada que incluye a las FFMM.

²² La suma de los actores perpetradores no da 100% dado que en un evento puede haber más de un actor causante.

²³ Sistema Integrado de Información Transversal SIDI – UMAIC.

²⁴ Víctimas de MAP/MUSE – DAICMA.

²⁵ Reporte Único de Víctimas – UARIV. <http://mi.unidadvictimas.gov.co/RUV>

- 4. Mujeres y Niñas ante la discriminación y Violencia Basada en Género (VBG).** Según la Secretaría de Salud departamental (2015), las niñas entre los 10 y 15 años son las más afectadas por violencia sexual. Entre 2005 y 2013 la tasa de fecundidad para el Chocó en niñas de 10 a 14 años de edad aumentó de 2.71 a 3.14 niños por mujer. La falta de cifras desagregadas por sexo es uno de los obstáculos que imposibilitan la implementación de políticas públicas basadas en la realidad de las mujeres y niñas, así como acciones diferenciadas en la respuesta a sus necesidades humanitarias. La situación de inequidad de género en las comunidades indígenas merece especial atención, incluyendo el respeto por las prácticas culturales arraigadas como el embarazo infantil y adolescente, y en general las barreras para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, jóvenes y mujeres adultas. Los hogares en Chocó con jefatura femenina corresponden al 40.4% en comparación con el 36.4% a nivel nacional²⁶; en un departamento en que el desempleo en mujeres es 10 puntos porcentuales mayor al de los hombres, esta situación las deja en mayor estado de vulnerabilidad frente a la explotación, abuso y discriminación por género. La Gobernación inició la formulación de la política pública de género con el respaldo de varios miembros del ELC. Según lideresas sociales, se está realizando de manera participativa, pero existen múltiples inquietudes sobre la partida presupuestal que se le asignará a la misma. Para 2017, el ELC priorizó como meta estratégica la incorporación del enfoque de género en todas sus acciones a través del Sub Grupo y el Punto Focal de Género del ELC.
- 5. Comunidades étnicas.** En zonas rurales, la totalidad de las afectaciones humanitarias se dan en comunidades indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, el 100% de las víctimas de desplazamiento y restricciones a la movilidad en el semestre son de estas comunidades, así como el 100% de las víctimas civiles de MAP han sido indígenas. Adicionalmente, son los líderes y lideresas de estas comunidades quienes han sufrido amenazas, homicidios (1) y desplazamientos individuales (4)²⁷.
- 6. Confinamiento y Acceso Humanitario.** El confinamiento y las restricciones a la movilidad son consecuencia directa de la dinámica del conflicto armado. El confinamiento solo es considerado hecho victimizante a partir de febrero 2016²⁸, por lo que no existen datos consolidados de cuántas personas se han visto afectadas por este hecho en los últimos años, a pesar de que las consecuencias pueden ser igual de graves que las del desplazamiento. A pesar de la dificultad de medición, se sabe que más de 5.884 personas han sido víctimas de restricciones a la movilidad en al menos 10 diferentes eventos durante 2017²⁹. En la actualidad, todavía se dan vacíos en el registro de estos hechos, por lo que es necesario insistir en la importancia de una recolección rigurosa de los datos por parte de los organismos competentes. Las consecuencias que estos incidentes tienen en la población son, sobre todo, afectaciones a la seguridad alimentaria al no poder moverse para la caza, pesca y cultivos, así como también vulneración a derechos básicos como la salud y la educación. El propio carácter del confinamiento provoca dificultades en la atención y respuesta, respondiéndose de manera más tardía que en el caso del desplazamiento. Durante el primer trimestre de 2017, los municipios más afectados por este hecho fueron Lloró, El Litoral de San Juan y Riosucio por las mismas razones que causaron los desplazamientos, sumadas a la presencia de MAP.
- 7. Desastres naturales.** Las principales amenazas de origen natural en Chocó están relacionadas con inundaciones, vendavales y mar de leva; posicionándose entre los tres primeros departamentos más afectados por fenómenos naturales en el país. Esto sumado a las afectaciones por enfermedades transmitidas por vectores. En octubre de 2016, el desbordamiento de 24 ríos generó afectaciones a 22 de los 30 municipios. 76.225 personas (14.360 familias) damnificadas, al menos 5.500 niños y adolescentes se vieron obligados a interrumpir sus clases, 48 sedes educativas se vieron afectadas³⁰. Los municipios más afectados fueron Alto Baudó, Nóvita, Medio San Juan, Lloró y Juradó. En respuesta a esta emergencia, el ELC, en coordinación con las instituciones pertinentes, implementó acciones de gestión y reducción del riesgo a través de los componentes de agua y saneamiento básico, apoyo psicosocial, educación y protección con enfoque de género.
- 8. Frontera.** El departamento es usado como lugar de tránsito de las redes de tráfico de migrantes a través del Golfo de Urabá, que buscan la salida del país hacia Panamá como paso para llegar a los Estados Unidos. En los últimos años se ha visto un aumento en el flujo ilegal de extranjeros, aunque por su clandestinidad es difícil obtener cifras certeras de cuántas personas, de dónde y en qué condiciones han utilizado este paso. Sin embargo, se sabe que Acandí, el municipio más septentrional y frontera con Panamá, es el que recibe mayor número de migrantes de paso en el departamento. En mayo de 2016 la frontera con el vecino país fue cerrada para evitar esta situación. Según Migración Colombia el paso de personas es controlado por una mafia que cobra cientos de dólares por el trayecto. A menudo los migrantes mueren en el intento de cruzar. La atención y respuesta están relegadas al accionar de la Infantería de Marina y las autoridades de migración nacionales.

²⁶ Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2015

²⁷ SIDI – UMAIC.

²⁸ Resolución núm. 001711 de la UARIV, de 24 de febrero de 2016, por la cual se define el confinamiento como hecho victimizante en el marco de la Ley 1448.

²⁹ SIDI – UMAIC (Corte a 31/03/2017)

³⁰ Sala de Crisis Departamental – UNGRD (Octubre de 2016)

1. FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL EN EL DEPARTAMENTO

	AÑO	MONTO TOTAL ADJUDICADO			BENEFICIARIOS TOTALES	Sectores con mayor financiación	
		CERF	Fondo Humanitario de Colombia	Otros Donantes			Total, Financiamiento Humanitario
HUMANITARIO	2016	-	USD 295.127	USD 16.795.310	USD 17.090.437	142.524	1. WASH 2. SAN (Seguridad Alimentaria y Nutrición) 3. EeE (Educación en Emergencia)
	2017	-	USD 4.041.666	USD 4.917.448	USD 8.959.114	77.411	1. WASH 2. Protección 3. EeE (Educación en Emergencia)
PAZ Y DESARROLLO	AÑO	MONTO TOTAL ADJUDICADO		BENEFICIARIOS TOTALES		Temas con mayor financiación	
		PAZ	DESARROLLO	PAZ	DESARROLLO	PAZ	DESARROLLO
	2016	6.383.646	5.712.292	51.920	29.737	Derechos de las víctimas	Equidad y Movilidad Social
2017	3.262.851	700.177	56.021	2.217	Transformación de conflictos y cultura de paz	Equidad y movilidad social	

Nota: Total entre paz desarrollo y humanitario no se deben sumar, dado que un proyecto puede caer entre ambos marcos.

2. COORDINACIÓN: EQUIPO LOCAL DE COORDINACIÓN (ELC)

El ELC es uno de los más grandes de Colombia con 33 organizaciones activas: 11 agencias ONU, la Misión de la ONU en Colombia, 12 ONG internacionales, 7 nacionales y 2 observadores. Se destaca la coordinación para generar atención integral y complementaria, considerando las debilidades institucionales de respuesta en especial en los sectores de Agua, saneamiento e higiene, Seguridad alimentaria y nutrición, y Protección. Se promueve la interlocución con entes como la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV), la Defensoría del Pueblo y el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) para facilitar la coordinación y las acciones complementarias que respondan a los vacíos identificados en la respuesta.

Presencia operativa del Equipo Local de Coordinación Chocó

COORDINACIÓN

	Albergue	Agua, saneamiento e higiene	Seguridad alimentaria y nutrición	Salud	Protección	Educación	Recuperación temprana
HUMANITARIO	OIM, ACNUR, NRC	OXFAM, CICR, UNICEF, Fundación HALÚ, OIM, AECID, SNPS, FLM	PMA, FAO, UNICEF, Pastoral Social, Fundación Plan, CICR	CICR, CRC, HAI, Fundación HALÚ, Diakonia, MercyCorp	ONU DDHH, ACNUR, OCHA, UNICEF, NRC, MAPP-OEA, OIM, SWEFOR, CCCM, RDMCh	NRC, OIM, WCH, Plan, HAI, CID, Caminar	PNUD, FAO, Fundación Plan, OIM, PMA
	PAZ			DESARROLLO			
	ONU Mujeres, PNUD, Fundación Plan, Fundación Luterana, PMA, OCHA, OACNUDH, UNDOC			OIM, PNUD, UNFPA, FAO, PMA, UNICEF, SCIAF, Global Communities			

Elaborado por:



Con liderazgo de:



Este producto fue desarrollado con el apoyo financiero de la Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

Para mayor información sobre este producto, contacte a:

ELC Chocó

Dirección: Calle 21 # 24 – 82, Piso 1

Teléfono: +57 4 6722377

Correo electrónico: choco@umaic.org